



EL CÍRCULO VIOLENTO DE MICHOACÁN

UN CÁRTEL QUE SOBREVIVE PESE A TODO

Ferozmente combatida en el sexenio de Felipe Calderón, La Familia Michoacana jamás se extinguió. Así lo revelan fuentes oficiales consultadas por este semanario, quienes explican que la supervivencia del grupo criminal fue posible mediante acuerdos criminales entre autoridades estatales y funcionarios en turno. Y es ahí sobre esas redes turbias donde salta el nombre de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador michoacano que se ha des-
tapado como aspirante presidencial.

PATRICIA MONREAL

MORELIA, MICH.— Los pactos que grupos delincuenciales y autoridades estatales han tejido en Michoacán mantienen al estado inmerso en una dinámica de violencia permanente.

Homicidios, feminicidios, desapariciones y extorsión son la constante de una realidad que no ha encontrado punto final con la alternancia en el gobierno local porque los cárteles, como el de Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, están enquistados en el mapa estatal.

El calificativo "narcoestado" para Michoacán fue acuñado por Gregorio López Gerónimo, el Padre Goyo de Apatzingán —exintegrante de los grupos de autodefensa en el estado—. El clérigo ha responsabilizado al exgobernador Silvano Aureoles Conejo de ser el artífice de tal condición.

Asegura que las supuestas relaciones del hoy aspirante a la Presidencia de la República con grupos delincuenciales no se

construyen a su bastión político en la región de oriente del estado, también abarcan otros puntos del territorio estatal.

En el caso de Apatzingán, el religioso señala que "se conocía su relación con El Boto, César Sepúlveda Arellano, de Los Viajes". También sostiene que algunos de los ranchos de los que fueron despojados sus propietarios originales —por la delincuencia organizada en territorio estatal— acabaron en manos del exmandatario; "tiene como 20; el más cotizado es Torrecillas, y otro que se llama Ojo de Agua de Pastores".

Con la presunta prevalencia de acuerdos con grupos delincuenciales en la administración de Aureoles Conejo, la población vivió inmersa en una ola de violencia que cobró en su sexenio 9 mil 366 vidas, homicidios dolosos, de acuerdo con la estadística de la Fiscalía General del Estado (Proceso 2354). En promedio hubo un asesinato cada cinco horas durante su administración.

En octubre último Aureoles Conejo anunció en la Ciudad de México su intención de contender por la Presidencia de la República en 2024, por la alianza oposito-

ra. El exgobernador comenzó un recorrido por ciudades del país en las que es presentado como precandidato por el PRD.

Relaciones peligrosas

El arribo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla a la gubernatura michoacana en octubre de 2021 habría modificado la correlación de fuerzas delictivas en el estado. "Con el cambio de gobierno, no había acuerdos aún, y la indicación fue: arréglense entre ustedes", dicen fuentes de la Fiscalía General del Estado consultadas por Proceso, que solicitaron reservar su identidad.

"En los tiempos de Silvano Aureoles había pacto; él ponía sus manos en Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Contepec, Maravatío y Morelia", consignan las fuentes.

El 28 de septiembre de 2021, en Sesión del Pleno de la LXV Legislatura Federal, el diputado michoacano Hirepan Maya Martínez (Morena), apoyándose en un audio que reprodujo en tribuna, acusó que "Horacio Morales, El Perro, operador de La Familia Michoacana en Tuzantla, señaló a ▶



Viene de la
página anterior



Especial

La Familia Michoacana. Terror en las puertas de la CDMX

Silvano Aureoles por sus vínculos con el narcotráfico" y su operación política en favor del cártel.

En la discusión de la Ley General para la Protección y Comercialización de Artesanías el legislador aprovechó su intervención para subrayar que en "Michoacán tenemos gobernadores narcotraficantes, como el saliente, que ha infundido a nuestro estado en la corrupción".

En entrevista el jueves 1, Hirepan Maya dice que "muchos de los acuerdos que Silvano asumió con el crimen organizado en su sexenio siguen existiendo, por eso es que vemos una gran lentitud en las investigaciones de las denuncias que se hicieron en su momento".

El morenista también refiere que ha faltado compromiso político de los funcionarios del gobierno de Ramírez Bedolla para dar seguimiento a las irregularidades registradas en la pasada administración.

"No creo que se hayan dado nuevos acuerdos, más bien lo que ha faltado es responsabilidad; veo un gabinete estatal muy pasivo, y claro que no hay que olvidar que muchos de sus integrantes fueron funcionarios en el sexenio pasado."

Los presuntos vínculos de Silvano Aureoles con el narcotráfico fueron denunciados el 17 de marzo último ante la Fiscalía General de la República por diputados de Morena, PT y PVEM de la Legislatura local.

En la acusación se narran varios hechos, entre otros, "algunos que presuntamente lo vinculan con organizaciones de narcotráfico", refiere el diputado Fidel Calderón Torreblanca, quien para enton-

ces fungía como coordinador parlamentario de Morena en el Congreso estatal.

Los elementos consignados por los 17 diputados en su denuncia parten fundamentalmente de los señalamientos hechos por el Padre Goyo.

"Por alguna razón que yo no comprendo la Fiscalía General de la República remitió esa denuncia a la Fiscalía General del Estado, para que acá se lleve la investigación", señala Calderón Torreblanca.

El escepticismo del legislador acerca de que la denuncia prospere se debe a que el titular de la Fiscalía estatal, Adrián López Solís, forma parte del grupo político de Aureoles Conejo, con quien fue secretario de Gobierno y luego coordinador parlamentario del PRD en el Congreso estatal, para de ahí saltar a su actual cargo.

Reyes Galindo Pedraza, quien coordina a la bancada del PT en la Cámara estatal, recuerda que la querrela se da en un contexto donde la oposición, formada por PRD, PRI, PAN, PES, y la Representación Parlamentaria del Congreso, cerraron filas para declarar improcedentes tres solicitudes de juicio político contra el exmandatario.

Esos juicios fueron promovidos por José Alfredo Flores Vargas, diputado suplente del hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la pasada Legislatura; David Ochoa Baldovinos, representante de Morena ante el Instituto Electoral de Michoacán, y el apoderado legal del Rancho La Nueva Gloria, SA de CV, de Tamaulipas. Todos los procesos estaban relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos (**Proceso 2365**).

Cuando Aureoles Conejo salió a defender la campaña de la Alianza Va por México en 2021, recuerda Reyes Galindo, "en su argumentación señala algunos municipios, incluidos algunos de mi distrito (Múgica), otros del distrito de Coalcomán y de algunas otras zonas del estado, por presunta intervención delincinencial, y dice que fueron determinantes para el triunfo de Morena-PT por la gubernatura del estado".

El petista abunda: "Esos municipios fueron los que hace seis años le dieron el triunfo a Silvano; pero peor aún, él focalizaba en esos municipios y regiones la operación o acción de grupos delincuenciales durante su gobierno, situación que él permitió".

Otro par de denuncias contra Silvano Aureoles habían sido presentadas en mayo de 2021 por Alfredo Ramírez Bedolla, cuando contendía por la gubernatura. Las querellas fueron por amenazas y abuso de autoridad.

Los señalamientos contra el exmandatario son sólo "rumorología" a ojos de dirigentes perredistas. Víctor Manríquez González, líder parlamentario del PRD en el Congreso local, refiere que "lamentablemente" para los detractores de Aureoles, "de todo lo que han promovido en su contra vía denuncias, nada ha procedido".

Proceso buscó al exgobernador Aureoles; el exmandatario estatal solicitó que, vía sus colaboradores, se le hicieran llegar las preguntas para este texto. Sin embargo, al cierre de esta edición no se concretó la entrevista ni dio respuesta a los señalamientos.



Viene de la
página anterior

Una familia afincada al oriente

Dos semanas después de que Ramírez Bedolla rindió protesta como gobernador, en el bar La Cantinita, de Morelia, seis personas fueron asesinadas por un comando; entre las víctimas fueron identificados Óscar Méndez, exescolta de Aureoles, y Juan Ríos Rebollo, señalado como jefe de plaza de La Familia Michoacana en el oriente del estado.

La zona oriente de la entidad es el bastión político del exgobernador y su equipo. Zitácuaro es semillero de cuadros de peso en Michoacán, fundamentalmente de perredistas y priistas.

La influencia y presencia que La Familia Michoacana consolidó en todo el territorio estatal, bajo el mando de líderes como Nazario Moreno González, El Chayo, o Carlos Rosales Mendoza, El Tisico, se vio diezmada al ser objetivo de la acción gubernamental en las administraciones federales de Calderón y Peña Nieto. Pero de ninguna manera se extinguió.

Las escisiones y desencuentros entre integrantes del cártel abonaron al desplazamiento de sus fuerzas. La consolidación de alianzas le permitieron asentarse en la región oriente, fundamentalmente en los municipios de Angangueo, Hidalgo, Maravatío, Jungapeo, Tlalpujahuá, Zitácuaro, Contepec, Tuxpan, Senguio y Ocampo.

Grandes extensiones boscosas, además de sierras, cañadas y barrancas, componen el oriente michoacano. Ahí se encuentra la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, con los santuarios Sierra Chincua y El Rosario.

"En Hidalgo (Michoacán) todos sabemos que El 100 era el que cuidaba las huertas de Silvano", asegura una habitante de ese municipio azotado por el cobro de cuotas en alimentos, principalmente carne de res.

Medardo Hernández Vera, Lalo Mantecas o El 100, era el operador de La Familia Michoacana en la región. Una fuente desplazada de la zona –consultada para esta publicación– refiere que Hernández desapareció tras presuntos desacuerdos con los líderes de cártel, los hermanos Hurtado Olascoaga –Johnny, El Pez, y José Alfredo, El Fresa–. Su muerte, confirmada por sus familiares, fue dada a conocer el pasado 7 de junio por el diario *El Universal*.

Los hermanos Correa Velázquez, Ramiro, Jaime, Dimas y Daniel –este último, cabeza de grupo– están asentados en San Antonio Villalongín, en el municipio de Hidalgo.

Ellos establecieron alianza con La Familia Michoacana para controlar la región oriente. Sin embargo, la irrupción del Grupo X, encomendado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), acabó modificando los acuerdos.

El homicidio de Lalo Mantecas propició una recomposición de fuerzas en el lugar,

disolviendo la alianza de La Familia Michoacana y Los Correa.

En septiembre último Dimas Correa fue asesinado y su cuerpo desmembrado; una millonaria recompensa ofreció el CJNG por Daniel El Tigre, líder de Los Correa, según información dada a conocer por el portal informativo *90 Grados*.

"El Grupo X es local, ahí de Zitácuaro; ellos nacieron en la campaña de Silvano, como grupo de choque, y los usaron también en la elección pasada en favor de Toño Ixtláhuac (actual alcalde), pero luego se les salieron de control", explica un habitante desplazado de la región, quien pide permanecer en el anonimato.

Asegura que el pacto entre Los Correa y La Familia Michoacana ha quedado disuelto, y esta última ha negociado con el Grupo X, al cual le dejaron la cabecera municipal de Zitácuaro para sus operaciones delictivas.

"La Familia se quedó con la tenencia de La Encarnación Zitácuaro y hacia abajo, Juárez, Tuzantla, Tiquicheo, Susupuato; y para arriba, de la tenencia de Aputzio de Juárez, en Zitácuaro, hacia todo lo que es el Estado de México".

Ocampo, Angangueo y Senguio estarían ahora en disputa con Los Correa por el control de la venta de carne.

Fuentes de la Fiscalía General de Michoacán, consultadas por *Proceso*, señalan que en el oriente michoacano, en Hidalgo y Tuxpan, es particularmente grave la crisis de seguridad porque ahí "ya hay de nuevo mando político".

Carlos Paredes Correa arribó por segunda ocasión como presidente municipal de Tuxpan. El edil pertenece al grupo político de Aureoles, con quien se desempeñó en su gobierno como vocal ejecutivo

del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal. El 7 de octubre de 2021 la fachada de su casa fue baleada.

En tanto, los asesinatos van al alza en el oriente estatal: 169 de enero a octubre últimos, una treintena más que los registrados en 2021, cuando la cifra sumó 139; en 2020 fueron 91 los homicidios dolosos registrados por la Fiscalía General del estado.

El control político y la presencia delincuencia en la región han encontrado tope en las comunidades indígenas, donde la organización y el ejercicio de gobiernos autónomos a partir de sus usos y costumbres han logrado desterrar de sus territorios la operación de los cárteles.

"Ahí tienen tranquilidad ahorita", refiere la fuente desplazada de la región consultada; "ahí no hay crimen, ellos no se dejan, espérese tantito y va a ver cómo se empiezan a levantar en armas si los vuelven a molestar."

Los gobiernos comunales de Crescencio Morales y Donaciano Ojeda, en Zitácuaro, fueron reconocidos legalmente en 2021 y ejercen de manera directa el presupuesto proporcional que les corresponde del municipio, al amparo de la Ley Orgánica Municipal aprobada ese año por el Congreso estatal; la comunidad de Francisco Serrato no ha concluido el proceso legal con el Instituto Electoral de Michoacán, aunque cuenta en lo interno con su Concejo Comunal.

Pero la autonomía y la salvaguarda del territorio de las comunidades indígenas en el oriente de Michoacán aún deberán librar la batalla legal emprendida por el gobierno municipal de Antonio Ixtláhuac Orihuela, que vía una controversia constitucional ante la Corte busca retomar control sobre esos lugares. 

Octavio Gómez



Aureoles. Denuncias por ligas con el narco